

JORGE RESTREPO
COLUMNA



Corrupción sistemática, orgánica y generalizada

El escándalo de corrupción que envolvió al Ejército este fin de semana es más serio que una simple desviación de recursos para el lucro personal o la captura de rentas.

Eso existe, y es serio, pues va desde los títulos mineros y la compra de multimillonarias tierras hasta el tráfico de armas e insumos. Hay militares que se lucran del conflicto.

Pero la mayor gravedad del problema está en el hecho de que la corrupción la controlaban los hombres acusados de los "fallos positivos". Y ellos confiesan que dirigían parte de esos recursos a mantener las familias de los acusados y para pagar los abogados y costos de su defensa.

A tal grado ha llegado la solidaridad de la institución con estos acusados de los peores crímenes que manchan el honor militar, que el mismo comandante de las Fuerzas Militares valía con sus palabras la estrategia de defensa: "hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa guevonada".

Esa fue la justificación de la gran corrupción: apoyar a los compañeros caídos en desgracia. Y en esa justificación se va de largo el discurso del honor, el respeto por la Ley y la función misma de las Fuerzas Militares: proteger a los ciudadanos. Lo demás sobra.

Este escándalo demuestra que no contamos con unas instituciones capaces de resolver los problemas de seguridad en Colombia. Menos con unas Fuerzas Militares capaces de transformarse para construir la paz cuando lo gremios acordar el cierre del conflicto con las guerrillas.

*Director del Cerac y profesor de la Universidad Javeriana.

COLOMBIA

Contratación, un vulnerable flanco del estamento militar

Aunque hace años se propuso que la contratación esté en manos solo del Ministerio, no hay avances en el tema.

ESCÁNDALO EN LAS FFMM.

Colprensa

La centralización de los recursos de las Fuerzas Militares ha sido la obsesión de los ministros de Defensa civiles. Tanto Marta Lucía Ramírez como Rodrigo Rivera se habían propuesto lo que volvió a mencionar Juan Carlos Pinzón: manejar la contratación del sector y ponerla en manos de la cartera; pero no han logrado tapar las goteras de corrupción.

El escándalo revelado por la Revista Semana evidencia que, pese a los esfuerzos, la normatividad no ha cambiado, mientras algunos militares tratan de sacar provecho del presupuesto más jugoso del Estado.

Defensa y Policía han sido los sectores a los que históricamente les han correspondido las mayores apropiaciones del país. Para este año los recursos ascienden a \$27,8 billones, cifra equivalente a los dineros para atender el sector de salud, el transporte y las comunicaciones.

En ese sentido, una importante porción del presupuesto nacional está en riesgo, como demuestran audios devaluados por Semana, que apuntan a que una red de oficiales arregla "mordidas" de hasta el 50 % en los contratos.

Ante la denuncia, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reconoció que el inspector del Ejército revisó, de manera aleatoria, contratos en cinco diferentes jefaturas, entre ellas Aviación, y encontró diez hallazgos con "una posible connotación disciplinaria". También anunció que se centralizará la contratación de Aviación del Ejército.

El anuncio fue calificado por expertos como un "pañito de agua tibia", ya que las medidas que buscan que el Ministerio tome las riendas de la contratación son de vieja data.

"La directiva de centralización se quedó en el papel, lo que es inaceptable. El Gobierno le debe una explicación a la opinión pública, porque habiendo anunciado la conformación de una co-



En el 2003, cuando la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez propuso centralizar las compras de las FFMM, sectores como la aviación se negaron, argumentando que "los tiempos de adjudicación les resultaban contraproducentes".

misión independiente para las compras de la cartera desde el 2003, nunca la puso en operación", recuerda Alfredo Rangel, analista político y director del Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda.

"Anunciar de nuevo que se va a adoptar el instrumento da a entender que nunca se hizo una veeduría real sobre las compras", afirma Rangel. La centralización de las compras de las Fuerzas Militares fue una iniciativa liderada por la exministra Marta Lucía Ramírez, que, estando a la cabeza de la cartera de Defensa en el 2003, tomó la decisión a fin de lograr una economía de escala y reducir los costos del sector.

El coronel Wilson Díaz, experto en contratación pública y entonces asesor económico de Ramírez, explica que con esta política se hacía posible adquirir recursos y negociarlos a un mejor precio. No obstante, algunos sectores como la aviación no implementaron esta fórmula, argumentando que los tiempos de

adjudicación les resultaban contraproducentes. "En ocasiones se necesitan equipos con carácter urgente para poder operar; un helicóptero no se puede quedar en tierra esperando un repuesto", asegura el coronel.

Los análisis realizados hace más de 10 años hablaban de ahorros entre 27% y 35% con esta vía de contratación.

Más tarde, en el 2011, el entonces ministro Rodrigo Rivera anunció la entrada en vigencia de la Directiva Permanente No. 11 del 2011, para las contrataciones hasta el 2014. El documento tenía dos objetivos: establecer los lineamientos de control y seguimiento de toda la contratación del Ministerio de Defensa y permitir una política de centralización de las compras para hacer más eficiente el presupuesto.

De acuerdo con Rivera, esta directiva estaba encaminada a minimizar los riesgos de corrupción. Se buscaba que las empresas que contrataran con el Estado tuvieran un importante bagaje.

El escándalo de la 'monita Jaller'

En 1995 se conoció el caso de estafa por \$800 millones que sufrió el Ejército a manos de una atractiva mujer de origen libanés, Giselle Jaller, quien legalmente no existía, pues había suplantado a su hermana. Aun así, el Ejército aceptó tener negocios con su supuesta empresa, la cual tenía un capital de apenas \$3 millones.

En mayo de 1994, cuando la señora Jaller ya había recibido un avance de \$361 millones e incumplido con la entrega del material (16 400 ponchos, morrales y arneses), se decidió prorrogarle hasta octubre el plazo para la entrega. A pesar de sus constantes incumplimientos, el Ejército le pagó los \$800 millones a Jaller.

Jairo Líbreros, analista político y profesor de Política de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado de Colombia, resalta que en varias ocasiones se han hecho esfuerzos en pro de la transparencia en la justicia, "pero la contratación militar ha encontrado barreras que impiden que haya controles".

El experto considera fuera de lógica hablar de una autorregulación por parte del Ministerio de Defensa. "Está claro que estos procesos deben estar atados a la legislación y estar en manos de un ente más transparente", advierte.

Además, cuestiona que este sector considere el tema de la contratación "sacrosanto e intocable"; al creer "erróneamente que los recursos son de ellos, por lo que no han permitido que se les dé un manejo diferente, más claro. Entonces esos rubros terminan por quedarse en los bolsillos de los militares".

Los analistas coincidieron en advertir que la nueva directiva de centralización de este Gobierno tampoco marcará una diferencia, y temen que termine siendo solo un anuncio que pretende apagar los ecos del escándalo.

Relaciones con Ecuador

Las denuncias por la adjudicación ilegal de contratos dentro del Ejército, además de convertirse en un escándalo nacional, ya superó las fronteras, pues hasta el Ministerio de Defensa de Ecuador se menciona en las investigaciones.

Uno de los protagonistas de la supuesta red de corrupción es el coronel Robinson González del Río, quien en uno de los audios revelados por la Revista Semana habla de la posibilidad de hacer negocios con un general ecuatoriano, quien se supone es el responsable de la contratación de compra.

González del Río planeaba vender equipos y material militar, a través de un contrato amañado en el que él

aseguraba la adjudicación por parte del general de Ecuador.

Tras conocerse estas denuncias, el Ministerio de Defensa del país vecino dispuso una investigación, al tiempo que aclaró que esa cartera de Estado no ha realizado, bajo su mecanismo de contratación legalmente definido, ninguna adquisición de equipo militar a Colombia.

Para Diego Cediel, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad La Sabana, "si las relaciones internacionales se están utilizando para hacer contratos con serios visos de corrupción, estas pueden verse afectadas, pues las partes empiezan a generar un ambiente de desconfianza".

¿Qué hay detrás de las 'chuzadas' en el Ejército?

Análisis

El proceso de paz que adelanta el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba, habría generado una división en el país, entre simpatizantes y opositores de los recientes escándalos del Ejército.

Así lo creen algunos analistas consultados por El País, quienes consideran que dentro de las mismas Fuerzas Militares habría una disputa interna que estaría motivando las denuncias que se han conocido en las últimas semanas: el caso de las interceptaciones de Andro-

meda y la corrupción en la contratación dentro de las Fuerzas Armadas.

Para Camilo González Posso es claro que hoy existe una "guerra de inteligencia" entre los sectores que apoyan las políticas del presidente Juan Manuel Santos y aquellos que quieren favorecer la oposición.

"Yo creo que hay formas oscuras de ajustes de cuentas entre corrientes del Ejército que están enfrentadas debido a su posición frente al proceso de paz", declaró González Posso.

"Chuzarnos los unos a los otros" es -según el analista- el nuevo lema que se está aplicando en el país, pues las interceptaciones telefónicas se han con-

vertido en un 'arma' para incriminar y demostrar las irregularidades que se cometen en una determinada entidad, en este caso el Ejército. "Una situación que termina favoreciendo a unos determinados sectores".

En este último escándalo de la contratación, sin embargo, se aclaró que las 'chuzadas' hacen parte de una investigación que adelanta la Fiscalía de Medellín por el caso de los 'fallos positivos', en el que uno de los investigados es el coronel Robinson González del Río, a quien le interceptaron varias conversaciones con otros altos oficiales.

A pesar de eso, algunos se atreven a especular que así estas denuncias estén

inmersas en un proceso judicial que adelanta la Fiscalía, el hecho de que hayan sido filtradas a un medio de comunicación revela ciertas intenciones.

En ese sentido, el experto en conflicto armado John Marulanda sostiene que estas nuevas denuncias tendrían como objetivo afectar la imagen de las Fuerzas Militares. "Una de mis conjeturas es que se está utilizando políticamente al Ejército con fines de posconflicto, es decir, se quiere debilitar para que en determinado momento -si se concreta el proceso de paz- las Fuerzas Militares pierdan terreno, bien sea porque se reduzcan o se les asignen otras tareas", sentenció.